S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 31
O R D I N A R I A
MARTES 13 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinticinco minutos del martes trece de marzo de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. No asistió el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo por encontrarse desempeñando una comisión de carácter oficial. La señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se incorporó una vez iniciada la sesión.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número treinta, ordinaria, celebrada el lunes doce de marzo de dos mil doce.

Por unanimidad de nueve votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes trece de marzo de dos mil doce:

II. 1. 293/2011

Contradicción de tesis 293/2011 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, el amparo directo 1060/2008 y los amparos directos 344/2008 y 623/2008. En el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se propuso: *“PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en términos del considerando Cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Deben prevalecer con carácter de jurisprudencia, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Dése publicidad a las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo”*. Los rubros de las tesis a que se refiere el punto resolutivo Segundo son los siguientes: *“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE,*

FORMAN PARTE DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD DE DERECHOS HUMANOS” y “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES OBLIGATORIA PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA”.

El señor Ministro Presidente Silva Meza manifestó que se continuaría con la discusión del considerando quinto relativo a la consulta de los criterios que deben prevalecer como jurisprudencia.

La señora Ministra Luna Ramos precisó los antecedentes que dieron origen a la contradicción de tesis e indicó que el punto de la contradicción se basa en dos vertientes que consisten, primero, en determinar la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos respecto de la Constitución; y, segundo, si la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es o no obligatoria.

Señaló que el proyecto sostiene respecto del primer punto, que existe un bloque de constitucionalidad, masa de derechos o bloque de regularidad, en la inteligencia de que los tratados en materia de derechos humanos están al mismo nivel jerárquico que la Constitución, respecto de lo que se manifestó en contra, pues el artículo 133 constitucional establece el diseño de nuestro sistema normativo como sistema nacional a partir del principio de

supremacía constitucional, determinando que las leyes que emanan de la Constitución y los tratados internacionales que estén acordes con ésta, serán la ley suprema de la Unión.

Además, las leyes y los tratados internacionales emanadas de la Constitución deben ser acordes con ésta, lo que no implica que dicho precepto constitucional determine la jerarquía normativa de nuestro sistema jurídico, sino que prevé el principio de supremacía constitucional.

Recordó la tesis aislada que sostiene que los tratados internacionales están jerárquicamente por encima de la Constitución, la que no comparte, toda vez que no se está ante un principio de jerarquía normativa sino de supremacía constitucional.

Mencionó el caso del artículo 31, fracción IV, constitucional al tenor del cual ejemplificó cómo opera el principio de jerarquía normativa de forma piramidal, al prever los principios de equidad tributaria a los cuales debe sujetarse la ley tributaria, en la inteligencia de que su reglamento presentará un grado mayor de concreción; sin embargo, la Constitución al ser fuente del sistema jurídico mexicano establece en todos sus preceptos diversas regulaciones en diferentes materias, por lo que la relación jerárquica es vertical y nunca horizontal pues trataría sobre materias distintas, tal como sucede respecto de los tratados internacionales, ya que éstos obedecen al compromiso internacional del Presidente de la República avalado por la

Cámara de Senadores respecto de que una norma de carácter internacional se incorpore a nuestro derecho interno, sin que deba regular un artículo expreso de la Constitución, por lo que pueden existir diferencias entre éstos y la propia Constitución, ante lo cual, estimó que debe prevalecer el principio de supremacía constitucional.

Se manifestó de acuerdo con la propuesta del señor Ministro Ortiz Mayagoitia relativa a que existen normas de fuente internacional que sí tienen rango constitucional porque las adopta la propia Constitución, en tanto que otras, forman parte del derecho interno y, por tanto, se incorporan a éste a través del procedimiento previsto en la propia Constitución.

En ese tenor, se pronunció en contra de la propuesta relativa a la jerarquía normativa, considerando que debe aplicarse el principio de supremacía constitucional, recordando el contenido del artículo 46 del Convenio de Viena relativo a que si un tratado internacional atenta contra algún precepto constitucional, éste se puede dejar de aplicar.

Precisó que del artículo 1º constitucional se desprende que todos los mexicanos tienen derecho de gozar de los derechos humanos de fuente constitucional, así como de los reconocidos en tratados internacionales, los que no podrán restringirse salvo en los casos previstos en la propia Constitución.

Agregó que dicho precepto prevé que existen derechos humanos de fuente nacional y de fuente convencional, además de que existe la obligación de realizar control de constitucionalidad y control de convencionalidad y precisó en qué consiste cada uno.

Consideró que actualmente se establecen tres tipos de controles: el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad y el control de legalidad o de exacta aplicación de la ley.

Estimó que los tratados internacionales no están a la par de la Constitución ni aun cuando se trate de derechos humanos, porque así no está establecido en el propio artículo 1º al referirse a las restricciones; lo que no es obstáculo para que la Constitución reconozca los derechos humanos, que se pueda aplicar el control de convencionalidad y que los derechos humanos puedan ser restringidos por la propia Constitución en los casos que así se encuentren señalados en ella. Por tanto, aunque se prevé la obligación de realizar el control de convencionalidad a través de lo previsto en dicho precepto, no puede entenderse como control de constitucionalidad.

Manifestó que al presentarse divergencias entre las normas establecidas en los tratados internacionales y la Constitución, así como entre éstos y alguna disposición de carácter interno, debe reconocerse el principio de supremacía constitucional.

Precisó que en el caso del arraigo, previsto actualmente en la propia Constitución, aun cuando el Pacto de San José no lo establezca, debe estarse a lo previsto en aquélla, máxime que de sostenerse lo contrario se estaría colocando a ese tratado internacional por encima de la Constitución.

Por lo que se refiere a los precedentes resueltos en los casos de Yucatán y de Zacatecas, precisó que en este último el Pleno estimó innecesario analizar los tratados internacionales porque en la materia de traslado de reos la Constitución establece los lineamientos suficientes para invalidar los actos impugnados.

En relación con el asunto relativo al Estado de Yucatán precisó la votación emitida así como las posturas expresadas al respecto.

En relación con el principio pro persona indicó que atendiendo a éste no es posible aplicar un tratado internacional que vaya en contra de la Constitución pues se violaría el principio de supremacía constitucional. Por tanto, se manifestó en contra de la propuesta del proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas precisó que en diversas ocasiones se ha separado de la expresión “bloque de constitucionalidad”, por lo que no era necesario repetir los argumentos con los que se ha pronunciado en ese sentido.

Indicó que no es posible vaciar de contenidos los preceptos constitucionales, para lo que recordó el párrafo primero del artículo 1º constitucional que obliga a los jueces constitucionales a hacer un análisis de la restricción de un derecho humano en sentido amplio y recordó que al resolverse el asunto varios 912/2010 votó en el sentido de la aplicación de los tratados internacionales salvo cuando fueran contrarios al texto constitucional.

Recordó que en el caso del Estado de Zacatecas, el Pleno resolvió este asunto conforme a la Constitución al ser más favorable esa interpretación. Sin embargo señaló que en el caso del Estado de Yucatán, se separó de las consideraciones del proyecto, al estimar que de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1º constitucional, debe realizarse una interpretación conforme que sea más favorable pro persona, proponiendo una conciliación del artículo 21 constitucional con los tratados internacionales, a fin de que a la persona que se le impone una sanción pueda permutarla por trabajos a favor de la comunidad.

Asimismo, señaló que al resolverse la acción de inconstitucionalidad 48/2009 relativa al requisito de ser mexicano por nacimiento para desempeñar ciertos cargos públicos, sostuvo el criterio de que al establecerse de esta manera por la Constitución, se debía analizar si la determinación del legislador era razonable para exigir dicho requisito.

En ese tenor, manifestó que convendría con todos los razonamientos del proyecto hasta el punto relativo a que se está en presencia de una restricción o suspensión a los derechos humanos señalados en la Constitución, la que se deberá analizar de acuerdo a la interpretación más favorable pro persona; sin embargo, de no haber esa posibilidad, se deberá estar al texto constitucional, sin menoscabo de reconocer la supremacía de la Constitución, incluso sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas consideró que bajo el criterio de que los tratados internacionales no están a la par de la Constitución, se estaría generando un vaciamiento de la reforma en materia de derechos humanos, estimando que la inquietud de aquellos señores Ministros que se manifiestan en el sentido de que éstos están por debajo de la Constitución consiste en que se puede establecer que algún precepto de ésta podría contraponerse a un derecho humano previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otro tratado.

Agregó que existe una posición horizontal de paridad entre la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos derivada de la interpretación armónica del texto constitucional; por lo que el legislador protegió la validez de la Constitución con la interpretación conforme prevista en su artículo 1º frente al control de

convencionalidad, así como del principio pro persona, sin que la propia Constitución pierda su supremacía, sino que la potencializa al proteger los derechos humanos y establecer una cláusula abierta reconociéndolos en tratados internacionales. Por ende, indicó que los derechos materializados de las personas son supremos.

El señor Ministro Aguirre Anguiano se pronunció a favor de la propuesta de la señora Ministra Luna Ramos relativa a la supremacía y no a la jerarquía de la Constitución, toda vez que diversas normas tienen horizontalidad.

Manifestó interrogantes respecto a si en el orden jurídico mexicano existía y existe la supremacía constitucional, estimando que la jerarquía de la Constitución está por encima de todas las demás normas.

El señor Ministro Presidente Silva Meza se manifestó a favor de la propuesta del proyecto con algunas dudas respecto de ciertas consideraciones.

Precisó que de manera diferente este Tribunal Pleno ha expresado su inconformidad con el uso del término “bloque de constitucionalidad”, en distintos sentidos; coincidiendo en que en el proyecto se haría referencia a un conjunto de normas.

Estimó que las reformas en materia de amparo y de derechos humanos instituyeron un parámetro de control de constitucionalidad, respecto del que deben determinarse sus

alcances, los que ahora se incluyen por mandato constitucional como parámetros de control de constitucionalidad a las normas internacionales sobre los derechos humanos, así como con la Constitución.

Indicó que respecto del alcance del parámetro de control de regularidad constitucional, para el cual el proyecto utiliza el término “bloque de constitucionalidad”, se refiere a un rango de jerarquías, no a un parámetro de validez sino de análisis judicial, recordando que al resolverse asuntos sobre este tema formuló un voto particular.

Consideró que los derechos humanos de fuente constitucional y los derechos humanos de fuente convencional integran un conjunto normativo pro persona.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea conforme a lo manifestado, precisó que el término de “bloque de constitucionalidad” se utilizó en el proyecto porque estimó que tenía la claridad necesaria para referirse al conjunto normativo de derechos; sin embargo, ofreció modificarlo conforme lo manifestado por la mayoría.

Señaló que la propuesta se refiere a los supuestos en que los tratados han sido incorporados adecuadamente al sistema constitucional mexicano, para que conforme a lo previsto en el artículo 1º constitucional, tanto los derechos humanos previstos en la Constitución, así como los de fuente internacional, sean el bloque de validez o la masa de derechos que se interrelacionan conjuntamente para

proteger los derechos humanos de los habitantes de nuestro país, por lo que debía hacerse referencia con igualdad de validez a estos dos tipos de normas, las que deberán aplicarse conforme al principio pro persona, abandonando el tema de jerarquía constitucional para entenderlo como un conjunto normativo en que interactúan recíprocamente las normas para aplicar la de mayor beneficio para la persona sin que implique que los tratados internacionales sean superiores a la Constitución ni viceversa, toda vez que debe interpretarse conforme al más favorable, por lo que precisó que la propuesta del proyecto consiste en que una vez que los tratados internacionales son incorporados al orden constitucional cuando se trata de derechos humanos, no compiten en un grado de jerarquía, sino que obligan a los juzgadores, por mandato constitucional a interpretarlos armónicamente en beneficio de la persona, para lo que eliminaría del proyecto el término de “bloque constitucional”.

El señor Ministro Aguilar Morales consideró que el problema de la discusión no radica sólo en el término empleado en el proyecto, porque con su supresión no se precisa el alcance o la definición de las normas contenidas en los tratados internacionales en relación con las previstas en la Constitución.

Manifestó que si tienen igualdad las normas previstas en los tratados internacionales y las diversas contenidas en la Constitución, entonces las normas de éstos serían iguales a las de la Norma Fundamental, y se debería aplicar la más

favorable a la persona, siempre que no se prefiera la aplicación de las normas de los tratados internacionales a las de la Constitución. Por ende, consideró que la supresión del término señalado no implicaría que se esté vaciando el contenido de las normas constitucionales, sino que se estaría determinando lo que sería el sentido exacto de la supremacía constitucional frente a cualquier otro instrumento nacional o internacional precisando su alcance exacto.

El señor Ministro Valls Hernández reiteró que se trata de favorecer la protección más amplia de un derecho fundamental y no de confrontar la Constitución con los tratados internacionales ni de ubicar a éstos jerárquicamente encima de la Constitución, sino de interpretar las normas impugnadas de acuerdo con la Constitución.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto, los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza manifestaron su intención de voto a favor. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Aguilar Morales y Ortiz Mayagoitia la manifestaron en contra.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea indicó que la segunda tesis que se propone se relaciona con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa a si ésta es obligatoria o es orientadora.

Recordó que el Tribunal Pleno tenía el criterio relativo a que las sentencias de la Corte Interamericana en los casos en que México es parte, son obligatorias en sus términos; además de que se ha reconocido que los derechos humanos de fuente internacional son un parámetro de validez, siempre que estén de acuerdo con la Constitución, por lo que el proyecto propone que dicha jurisprudencia es obligatoria para los jueces mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona, para lo que propuso situarse en un esquema conceptual distinto al de la tesis obligatoria o el precedente que tradicionalmente ha iluminado la forma de comprender los precedentes en nuestro sistema jurídico, recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con un órgano facultado para interpretarla.

Agregó que el hecho de que el artículo 1º constitucional prevea la obligación de realizar la interpretación más favorable, no implica que se reciba automáticamente esta jurisprudencia sino que existe un diálogo constructivo entre Cortes en el cual, en ocasiones los precedentes de los tribunales locales influyen sobre las decisiones de la propia Corte Interamericana.

El señor Ministro Aguirre Anguiano se manifestó en contra de la propuesta y estimó que no se había presentado algún argumento distinto a los vertidos en el caso ***** y recordó que conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir

la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes, por lo que sólo siendo partes se encuentran obligados. Asimismo indicó lo previsto en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas recordó que el tema, tal como indicó el señor Ministro Aguirre Anguiano se analizó en el asunto varios 912/2010 en el cual se determinó que únicamente tendrá carácter de vinculante la jurisprudencia derivada de casos contenciosos en los que el Estado Mexicano fuera parte y que en los que derivaran de otros países únicamente sería orientadora, lo que no compartió en su momento, pues no debería limitarse sólo a la que derive de los casos en contra del Estado Mexicano, por lo que se manifestó a favor del sentido del proyecto.

La señora Ministra Luna Ramos recordó los acuerdos tomados al resolver el asunto referido, señalando que conforme a la votación mayoritaria, ya existía un pronunciamiento del Tribunal Pleno.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consideró que en aquél momento no se analizaron todos los temas que se presentan en este asunto toda vez que no hubo oportunidad para ello, señalando que no se discutió entonces la interpretación pro persona o más favorable de la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

El señor Ministro Aguilar Morales reiteró conforme a su votación en el referido asunto, que la llamada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un concepto doctrinal; sin embargo, consideró que cuando se trata de un tratado o de un pacto, existen obligaciones recíprocas para que se cumplan los compromisos adoptados, e implícitamente éstos no se excedan.

Manifestó que la Corte Interamericana sólo resuelve casos concretos y que el artículo 63 del Pacto de San José es semejante al artículo 80 de la Ley de Amparo ya que prevé que cuando la Corte Interamericana advierta que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos por esta Convención en un caso concreto, dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho de libertad conculcado, que se reparen las consecuencias de la medida al afectado y que se pague una justa indemnización a la parte lesionada.

Por ende, consideró que se le está pretendiendo dar un alcance mayor a sus sentencias y que a su vez, la propia Corte Interamericana, excediendo sus facultades, ha impuesto obligaciones a los Estados, como sucede respecto del caso de México, más allá de la simple reparación a la persona del caso que estaba tratando.

Indicó que este Tribunal Pleno ha sostenido que dichas obligaciones que impone al Estado mexicano deben acatarse; sin embargo, consideró que esta obligación deriva

de ciertos criterios que a su vez pueden hacerse genéricos, que sería la jurisprudencia en sentido doctrinal amplio y, por tanto, serán obligatorios porque ya se juzgó un caso particular.

Recordó que al resolverse el asunto en el Tribunal Pleno se determinó que dichos criterios, en todo caso, podrían ser orientadores pero no vinculatorios, por lo que debía resolverse esta situación, considerando que sólo son orientadores.

La señora Ministra Sánchez Cordero dio lectura al párrafo 339 del fallo del asunto “*****” en el que se determina por parte de la Corte Interamericana el carácter de su jurisprudencia, de donde se desprende que el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad *ex officio* entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, tomando en cuenta el tratado internacional y la interpretación que de éste ha hecho la Corte Interamericana.

Agregó que existe entonces una obligación ineludible de integrar la jurisprudencia internacional con un carácter obligatorio independientemente de que ésta derive de casos en que involucren a otros Estados y que el carácter vinculante de la jurisprudencia internacional será en abstracto, pues dependerá en cada caso concreto de lo que

sea más favorable para la persona de manera casuística, sin que por ello pierda su naturaleza de jurisprudencia.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia recordó que el Consejo de la Judicatura Federal lleva a cabo procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los jueces que no aplican la jurisprudencia obligatoria, lo que tendrá implicaciones en la que se está declarando vinculante en este asunto.

Se manifestó en contra de la propuesta consistente en declarar obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana, recordando que en el caso de la jurisprudencia de este Alto Tribunal se exigen diversos precedentes para su integración.

Estimando inaprensible el concepto de jurisprudencia de Tribunales Internacionales los que de estimarse orientadores permitirían a los juzgadores del Estado Mexicano tomarlos en cuenta para aplicarlos en la medida en que se favorezca más la tutela de derechos humanos.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que aun cuando en el caso ***** estimó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene el carácter de obligatoria, en el proyecto que se presenta podrían hacerse algunos ajustes tomando en cuenta lo que significa el término jurisprudencia en nuestro sistema jurídico; en tanto que si se empleara el término precedente, se deberían establecer las diferencias entre *ratio decidendi* y *obiter dicta*.

Asimismo, recordó que en algunas etapas el Consejo de la Judicatura Federal sí ha sancionado a los juzgadores por la inobservancia de la jurisprudencia.

Estimó que en el caso concreto la fuerza vinculatoria de los precedentes de la Corte Interamericana provocaría que los órganos terminales del Estado Mexicano revocaran las decisiones que no se apegaran a esos precedentes.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó de acuerdo con la propuesta del señor Ministro Cossío Díaz respecto de la modificación del término jurisprudencia, así como con la relativa a que no se trata de una sanción a los juzgadores que no apliquen los precedentes, sino que busca controlar sus decisiones judiciales.

El señor Ministro Valls Hernández indicó que mantendría el criterio que sostuvo al resolverse el asunto ***** en el sentido de que aun cuando el Estado Mexicano no sea parte en el juicio respectivo, como consecuencia de haber suscrito el Pacto de San José, le serán obligatorias todas aquéllas que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se manifestó a favor del sentido del proyecto.

La señora Ministra Sánchez Cordero precisó que no se trata de una cuestión de responsabilidades o de sanciones, sino de una cuestión de control constitucional.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se establece que las decisiones de la Corte sean obligatorias para todo el sistema jurídico mexicano.

Recordó la cláusula *pacta sunt servanda*; por lo que al no haber sido aceptada la diversa de obligatoriedad por el Estado Mexicano, y por no tratarse de un superior jerárquico de éste, de aceptarse la propuesta se estaría atentando en contra de la soberanía nacional.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia señaló que es un hecho probado que el desacato a la jurisprudencia da lugar a una responsabilidad y recordó que el tema relativo a la obligatoriedad fue ampliamente discutido en la consulta del caso *****.

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que los señores Ministros que se han manifestado han reiterado el criterio que sostuvieron al resolver el caso *****.

Señaló que debía esperarse a la conclusión de la comisión oficial del señor Ministro Pardo Rebolledo para que el Tribunal Pleno se encuentre integrado en su totalidad y se pueda tomar una determinación.

El señor Ministro Aguirre Anguiano manifestó que hizo entrega a los señores Ministros de una nueva propuesta de la Contradicción de Tesis 21/2011 por lo que solicitó que se diera oportunidad para su revisión.

Sesión Pública Núm. 31

Martes 13 de marzo de 2012

El señor Ministro Franco González Salas señaló que no se había manifestado sobre la propuesta y precisó que votaría en el mismo sentido que lo hizo al resolverse el caso
*****.

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que el asunto y los demás continuarían en lista, convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el jueves quince de marzo del año en curso, a partir de las once horas y levantó esta sesión a las trece horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.